

El nuevo mapa energético

Aurèlia Mañé

Departamento de Política
Económica
Universidad de Barcelona

La evolución de la escena energética en este último año ha venido marcada por tres hechos: 2003 se inició con el fin de la huelga en el sector petrolífero venezolano, siguió con la guerra de Irak y parece que terminará con una mayor cohesión dentro de la OPEP. Estos tres acontecimientos son muy significativos de los cambios que se vienen produciendo en la escena energética mundial, y de forma distinta reflejan la pérdida de peso de las compañías públicas –o estatales– nacionales de los países de la OPEP en la producción mundial de hidrocarburos a favor de una creciente presencia de las grandes compañías energéticas privadas. Baste como ejemplo mencionar que las principales compañías privadas (ExxonMobil, RoyalDutch/Shell, ChevronTexaco, BPA-mocoArco, TotalFinaElf y las rusas Lukoil y Yukos) pasaron de controlar el 11 % de la producción mundial de petróleo crudo en 1992 al 21 % en 2001.

La huelga en Venezuela puede interpretarse como el resultado de una larga lucha entre un Gobierno que quería que Petróleos de Venezuela (PDVSA) siguiera sirviendo a los intereses nacionales y PDVSA, cuyos intereses particulares le han llevado a forjar alianzas con algunas de las grandes empresas extranjeras privadas del sector. La guerra de Irak supondrá que esos mismos grandes conglomerados energéticos privados y «fieles» –lo que podría excluir a TotalFinaElf– sean los beneficiarios de las concesiones petrolíferas que el nuevo Gobierno otorga para la explo-

tación de las inmensas reservas de este territorio (el 10,2 % mundial), y con ello incrementarán aún más su capacidad de influir en la escena energética mundial. Por último, la aparente cohesión interna de la OPEP sólo puede explicarse como el último intento para no perder más cuota de mercado frente al creciente poder de estos «nuevos competidores», que operan en «nuevos territorios» y que, después de haber tenido de forma directa o indirecta el control mundial de las actividades de transporte, refinación, producción y comercialización de bienes energéticos, también están obteniendo el control de las actividades de extracción a escala mundial.

En otras palabras, los hechos más relevantes de este último año son indicativos de que este nuevo milenio se caracterizará por una escena energética en la que un número cada vez menor de empresas privadas tiende a controlar verticalmente –todas las fases de la industria petrolera– y horizontalmente –a lo largo y ancho del planeta– la producción de energía mundial. Cuestión que, además de mostrar que todavía acrecientan más su grado de monopolio energético, puede llegar a significar que desaparece –con todas las imperfecciones que tenía– el mercado de los hidrocarburos, ya que las mismas empresas que controlan los yacimientos son las que consumen su producto.

Este hecho se ha traducido en una creciente capacidad de influencia en las decisiones políticas de los países en los que estas empresas se encuentran domiciliadas. El conflicto de Irak no ha modificado sustancialmente el mapa energético mundial, pero ha mostrado, tal vez con mayor crudeza, que las grandes empresas privadas del sector tienen una capacidad de influencia po-

lítica superior a la de la mayoría de estados nacionales. Por ello, podemos esperar que la política energética mundial –que debería estar reservada a las instituciones politicogubernamentales nacionales o supranacionales– venga dictada por un grupo cada vez menor de grandes empresas privadas. Empresas que, por ahora, se aglutinan en torno a lo que se ha denominado el «lobby energético estadounidense».

En los últimos dos años, la Unión Europea inició un proceso inédito en treinta años de política energética, que culminó con la presentación que la Comisión Europea realizó, en junio de 2002, del Informe final sobre el libro verde *Hacia una estrategia europea de seguridad y abastecimiento energético*. Curiosamente, ni este informe ni el libro verde tienen en cuenta la realidad mencionada, a pesar de que la futura creación de un espacio euromediterráneo puede convertirse en útil instrumento para contrarrestar el poder de este lobby. El espacio euromediterráneo tiene el potencial suficiente para ser un actor significativo en la escena energética mundial, pero dada la diversidad de agentes que operan en este espacio, la definición de una política energética común es casi imposible, mientras no se produzca un nuevo cambio en la estructura organizativa de la escena energética internacional. La primera cuestión es que no es necesariamente cierto que ser «país consumidor» implique ser actor pasivo en la escena energética. En conjunto, los países de la UE son los principales importadores de energía primaria (petróleo y gas) y la segunda zona exportadora de productos refinados. Esta situación debería hacer de la UE un actor de primer orden en el mal llamado «mercado energético», ya que co-

mo comprador significativo de una materia prima energética, que sin ser transformada o refinada y comercializada tiene poco valor para los consumidores, debería tener un cierto poder de mercado o capacidad para influir en los precios o cantidades de los bienes energéticos. La segunda es que se olvida que el conjunto de países productores de la zona es más amplio que Argelia y Libia. En el conjunto de países euromediterráneos nos encontramos con productores significativos (en el norte, Holanda, Noruega y la zona del mar del Norte; en el sur, Argelia y Libia), así como con otros menores (Siria, Egipto, Túnez y Marruecos). Además, muchos países euromediterráneos son lugar de paso de oleoductos o gaseoductos, o de embarque de transporte marítimo de hidrocarburos, lo que convierte a este espacio en el principal corredor energético mundial. Estos factores muestran que el espacio euromediterráneo energético es más importante y complejo que el que se suele dibujar. En primer lugar, los países de la UE deberían ser un actor de primer orden por consumir aproximadamente el 20 % de los bienes energéticos mundiales y tener una capacidad de refino sólo superada por EE UU; en segundo lugar, en la zona euromediterránea se hallan el 5,8 % de las reservas probadas de petróleo mundial y el 8,4 % de las de gas, lo que la convierte en una significativa productora mundial (el 13,3 % de la producción mundial de petróleo crudo y el 15,40 % de la de gas en el año 2002). Y, por último, este espacio constituye una de las principales zonas estratégicas del mundo en términos de transporte energético, ya que por ella circulan anualmente unos 350.000 millones de toneladas de petróleo. Estos datos indican que, como en tantos otros aspectos, una cooperación euromediterránea podría llevar a que esta zona se convirtiera en una gran potencia, no sólo con capacidad de influir en el devenir de la escena energética mundial, sino con capacidad de asegurar un suministro energético estable y a un precio aceptable para el conjunto de la zona. La cuestión es, por tanto, por qué esta realidad no se traduce y difícilmente se traducirá en una política energética euromediterránea coherente. En primer lugar, la UE se considera a sí misma como «país consumidor». En es-

te sentido, sus políticas se enmarcan en el cartel de países consumidores de la OCDE, la Agencia Internacional de Energía (AIE). En términos de una posible alianza energética euromediterránea, lo dicho plantea dos problemas. El primero es que las políticas de la AIE están marcadas por las prioridades de la OCDE y, sobre todo, por las de EE UU, que para bien o para mal es el país con una política energética más clara y definida. Y el segundo es que tradicionalmente las políticas de este cartel han sido contrarias a los intereses de los países productores de la zona. Ello implica que difícilmente podamos hablar de una política energética específicamente europea y que sea muy complicado aunar intereses entre los países productores y los consumidores euromediterráneos. En segundo lugar, en el espacio euromediterráneo, nos encontramos frente a distintos tipos de países productores. A un lado están Argelia y Libia, países del sur del Mediterráneo y miembros de la OPEP, cuya supervivencia depende de los ingresos provenientes de hidrocarburos en el exterior y cuyas estrategias han sido a corto plazo y basadas en maximizar la llamada «renta del petróleo». Al otro lado, están países como Noruega, Holanda y Reino Unido, con estrategias más a largo plazo, que, si bien en algunos casos –sobre todo en el de Noruega– se han aliado con los países de la OPEP, en general son buenos aliados de la AIE. En este sentido, también parece difícil contar con una alianza de productores euromediterráneos. Por último, deberíamos mencionar las discordancias que se pueden producir entre los Gobiernos y sus compañías nacionales (públicas o privadas). En un origen eran un instrumento de intervención pública, cuyo objetivo en algunos casos –Argelia, Libia y hasta cierto punto Noruega– era obtener el máximo de ingresos para contribuir al bienestar nacional, y en el resto debían servir para asegurar que su país dispusiera de un suministro energético estable a un precio razonable. Sin embargo, desde que las políticas neoliberales se han universalizado y se han privatizado, liberalizado, desregulado o «abierto» los sectores energéticos nacionales, las compañías nacionales han dejado su anterior función para convertirse en las aliadas de unas compañías petrole-

ras internacionales que defienden sus márgenes de beneficios y los intereses de sus accionistas. Por ello, difícilmente puede pensarse en alianzas basadas en intereses euromediterráneos, en tanto que si podemos hablar de alianzas corporativas entre los grandes grupos privados energéticos. Muestra de ello fue la creación de BPAmocoArco, el que entre las «grandes estadounidenses» se cuenta con Total (América) y Royal DutchShell (América), el creciente peso de las alianzas de estas grandes con la compañía argelina SONATRACH, etc. Por todo ello podemos concluir que en el espacio euromediterráneo nos encontramos con un conjunto de actores energéticos con intereses muy diversos que por sí mismos difícilmente confluirán en una estrategia común. Por lo tanto, el primer y gran reto de la política energética euromediterránea debería ser el de canalizar algunos de esos intereses hacia el espacio euromediterráneo. Sin embargo, los vientos de la política europea no soplan en esta dirección. No sólo por el crónico problema de los intereses nacionales frente a los europeos, sino por el intrínseco de la política euromediterránea: confiar que sin regulaciones e intervención pública los agentes privados actuarán de acuerdo con unas poco claras voluntades políticas y lograrán el bienestar común. Éste, que parece ser el principal problema de la cooperación euromediterránea, puede convertirse en dramático cuando hablamos de un bien estratégico como es la energía, ya que no debe olvidarse que los consumidores no somos ni las empresas demandantes de energía primaria (las refinadoras y generadoras de energía) ni las empresas oferentes de la misma (las productoras). Ante ello, los estadistas europeos deberían decidir si optan por una política que se base en la creación de grandes empresas privadas «euromediterráneas», o por una política que convierta al espacio euromediterráneo en una potencia energética de primer orden capaz de asegurar las necesidades de la zona. Por el momento han optado por la primera. Esperemos que no tarden mucho en decidirse por la segunda; si no, como en tantas otras cosas, la política energética mediterránea dependerá –todavía más– del lobby energético estadounidense.